

ARTICULISTA
INVITADA**AMALIA PULIDO***

@PULIDO_AMALIA

Colombia ante el juicio de la historia

La construcción de paz en Colombia no ha sido lineal ni perfecta, pero representa un referente internacional para la implementación de mecanismos de justicia transicional (JT). Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 hasta el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, a principios de esta semana, la nación andina ha recorrido un trayecto accidentado que invita a repensar la sostenibilidad de la JT.

La paz que resultó del diálogo entre el Estado y las FARC se edificó sobre un anhelo de reconciliación que, en 2016, despertó un optimismo extendido: tres cuartas partes de las personas manifestaban fe en las posibilidades de reconciliación. Pero, para 2023, sólo un tercio de la población consideraba que el país avanzaba en el rumbo de reconciliación.

La institucionalización de la paz se sustentó en un entramado de estructuras integral: comisiones de memoria histórica, unidades de atención y reparación a víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otras instancias que han procurado dar vida a las promesas de la JT. Aun así, el fortalecimiento del Estado más allá de la justicia retributiva no ha bastado para consolidar las transformaciones pactadas. En este escenario llegó el proceso judicial contra Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y se consolidó como una figura central de la derecha colombiana por su política de mano dura. Dos años después de su presidencia, el senador Iván Cepeda acusó al exmandatario de vínculos paramilitares. Su denuncia resultó en un expediente por supuesto soborno a

testigos y fraude procesal, mismo que en esta semana alcanzó un veredicto: por primera vez en la historia moderna de Colombia un ex presidente fue declarado culpable de la comisión de un delito.

La sentencia encendió de inmediato la polarización política y social. Las bancadas de derecha y el Centro Democrático –partido fundado por Uribe– denunciaron politización de la justicia. Frente a ello, Gustavo Petro, actual presidente, propuso que Uribe se sometiera a la JEP.

¿Qué implicaciones tendrá este proceso para la reconciliación y para la próxima elección presidencial de 2026? Cepeda, apoyado por Petro, ha reiterado la idea de extender mecanismos de reparación y verdad a ex gobernantes, grupos empresariales y medios de comunicación para esclarecer su papel en el conflicto armado.

En el terreno electoral, la condena llega en un momento de fragilidad para el Centro Democrático, cuyos precandidatos no superaron el 5% en la última encuesta. Todo apunta a que la estrategia política uribista buscará convertir la sensación de injusticia en cohesión interna. Para sus adversarios, el reto es articular un proyecto de país que vaya más allá de la confrontación y que abandere una JT renovada. Mientras, el país observa con atención cómo la justicia se coloca en el centro del debate político. El resultado del proceso contra Uribe y sus consecuencias muestran que la paz está ligada al imperio de la ley y al reconocimiento mutuo de responsabilidades.

**Presidenta del Instituto Electoral del Edomex*